



CONVENIO CON FUNDACIÓN ESPERANZA RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO “PRM AINEN”.

En Punta arenas, a veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, comparecen **FUNDACIÓN ESPERANZA**, en adelante el **"COLABORADOR ACREDITADO"**, RUT N°**72.147.600-6**, domiciliado en calle **Chiloé N°1156** comuna de **Punta Arenas**, región de **Magallanes y de la Antártica Chilena**, representado por don **ASTERIO HERNÁN ANDRADE GALLARDO**, cédula nacional de identidad N°**8.385.926-1**, del mismo domicilio, y el **"SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"**, en adelante “el **"SERVICIO"**”, servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, creado por la ley N°21.302, representado por su Directora Regional (S) de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena doña **JESSICA ANDREA RIVERA HERNÁNDEZ**, cédula nacional de identidad N°**9.269.608-1** ambos domiciliados en **Lautaro Navarro N°1112**, comuna de **Punta Arenas** quienes acuerdan el siguiente convenio:

PRIMERA: Antecedentes.

Las partes declaran que este convenio es el resultado del concurso público de proyectos para la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave, y programa de intervención con niños y niñas institucionalizados y su preparación para la integración a familia alternativa a la de origen, para colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de conformidad con la ley N° 20.032, autorizado mediante la resolución exenta N°1470, de 27 de diciembre de 2024, modificada por las resoluciones exentas N° 147 y N° 168, ambas de 2025, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Posteriormente, se adjudicó, mediante la resolución exenta N°**86**, de fecha 15 de abril de 2025, el proyecto denominado **"PRM Ainen"**, de la línea de acción y programa mencionados, al colaborador acreditado **FUNDACIÓN ESPERANZA**.

SEGUNDA: Objeto social.

El colaborador acreditado tiene por objeto social o fines, promover y ejecutar iniciativas tendientes a lograr la promoción y respeto de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, sujetos de derecho y de atención, al amparo de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y ratificada por el Estado de Chile en 1990; sus Protocolos Opcionales y demás Normas de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se ajusten a lo dispuesto en la Ley 20.032 y sus disposiciones generales y reglamentarias, propendiendo a la protección, restitución de derechos y reparación de daño de Niños, Niñas y Adolescentes vulnerados y sus grupos familiares, fortaleciendo su desarrollo integral mediante equipos y programas especializados, adaptados a sus necesidades y realidad territorial, con propuestas innovadoras en el ámbito de políticas públicas.

TERCERA: Sujeción a normas.

El colaborador acreditado, en este acto, declara conocer, entender y estar conforme con las menciones a los cuerpos legales a que se hace referencia en este convenio, en especial a las leyes N°s 21.302 y 20.032 y en el decreto supremo N°19, de 2021 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez y del Ministerio de Hacienda, que aprobó el reglamento de la ley N° 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

CUARTA: Individualización del proyecto.

Del colaborador dependerá el proyecto denominado **“PRM Ainen”** cuya sede estará ubicada en calle **Chiloé N°1156**, comuna de **Punta Arenas**, región de **Magallanes y de la Antártica Chilena**, que será supervisado por la Dirección Regional del Servicio en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El objetivo general del referido proyecto es: **Contribuir al proceso reparatorio del niño, niña o adolescente que ha sufrido maltrato físico o psicológico grave, constitutivo de delito y/o agresión sexual infantil.**

El Proyecto contempla, además, los objetivos específicos, señalados en el Título IV, denominado “Objetivos del Proyecto” contenidos en el formulario de presentación de proyectos, que corresponde al Anexo N° 2 del décimo segundo concurso público de proyectos, cuya convocatoria fue autorizada por la resolución exenta N°1470, de 27 de diciembre de 2024, modificada por las resoluciones exentas N° 147 y N° 168, ambas de 2025, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El proyecto presentado por el colaborador acreditado, formará parte integrante del convenio.

El Resumen Ejecutivo del proyecto es el siguiente:

Los objetivos específicos del referido proyecto son los siguientes:

- **Interrumpir la situación de maltrato y/o abuso, constitutivo de delito, mediante la activación de mecanismos judiciales requeridos para resolver la situación legal del niño, niña o adolescente y facilitar el acceso a la red de justicia.**
- **Favorecer el proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el niño, niña o adolescente y el adulto responsable.**
- **Fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar psicológico y social del niño, niña o adolescente, víctima de maltrato y abusos.**

Los resultados esperados del referido proyecto son los siguientes:

Respecto al objetivo general:

- El 80% de los niños, niñas y adolescentes egresados por cumplimiento del PII en el año t.

- El 80% de los niños, niñas y adolescentes egresados por causales asociadas a la intervención de PRM no reingresan en un período de 12 y/o 24 meses (según sean proyectos nuevos o de continuidad) a proyectos de la misma línea, respecto del total de niños, niñas y adolescentes egresados en los mismos períodos.
- El 80% de niños, niñas o adolescentes o familias califican de positiva o buena la atención recibida por el programa.

Respecto a los objetivos específicos:

- El 90% de niños, niñas y adolescentes logra la interrupción de maltrato y/o abuso sexual en los casos egresados respecto del total de niños, niñas y adolescentes egresados del proyecto.
- El 70% de los niños, niñas y adolescentes egresados disminuyen sintomatología presentada ex ante en la evaluación ex post.
- En el 70% de los niños, niñas y adolescentes se logra que los adultos responsables desarrollen y fortalezcan pautas relacionales protectoras respecto del total de niños, niñas y adolescentes egresados al proyecto.

Los resultados esperados del referido proyecto y las actividades específicas a desarrollar son los siguientes:

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1

Interrumpir la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito, mediante la activación de mecanismos judiciales requeridos para resolver la situación legal del niño/a y facilitar el acceso a la red de justicia.

1. Actividad:

Calificación y revisión de antecedentes judiciales relativos a la situación de vulneración que motiva el ingreso.

Etapas de intervención:

Fase Evaluación de Ingreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de la revisión de antecedentes judiciales. Registro en plataforma SIS. Documentos judiciales en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Generar las medidas o gestiones pertinentes con miras a restablecer los derechos vulnerados en base al interés superior del NNA, a través de análisis de antecedentes judiciales actuales y previos y de esta manera contextualizar la situación del NNA y su grupo familiar.

2. Actividad:

Revisión y actualización de antecedentes judiciales durante el proceso.

Etapas de intervención:

Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de la revisión de antecedentes judiciales. Registro en plataforma SIS. Documentos judiciales en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Mantener actualizados los antecedentes de la causa a fin de adoptar las medidas pertinentes en función de la interrupción de la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito a la luz del interés superior del NNA, retroalimentando a la familia.

3. Actividad:

Coordinación con el Ministerio Público según corresponda.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de la coordinación. Registro en plataforma SIS. Pauta de coordinación en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Recopilar los antecedentes más relevantes de la investigación Fiscal, en función de generar la interrupción de la situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito a la luz del interés superior del NNA.

4. Actividad:

Coordinación con curador ad litem, cuando corresponda.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de la coordinación. Registro en plataforma SIS. Pauta de coordinación en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Conocer, compartir y triangular información relevante tanto de la intervención (transversalmente en el proceso) como de las posibles acciones legales a concretar, tanto desde el curador ad litem como

desde el PRM, a fin de interrumpir situación de maltrato y/o abuso constitutivo de delito a la luz del interés superior del NNA.

5. Actividad:

Entrevista de encuadre con familia o adultos referentes significativos.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de entrevista de encuadre en carpeta. Registro en plataforma SIS. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Explicar y enfatizar el sentido y alcances de las actuaciones y/o resoluciones judiciales, relevando los principios, derechos y garantías normativas asociadas a la protección de la niñez y adolescencia implícitas en cada una de ellas contextualizando los alcances del proceso judicial considerando los enfoques transversales.

6. Actividad:

Comparecencia de profesionales tratantes ante Tribunales de Familia y auxiliares de la administración de justicia.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución del PII. Fase de Seguimiento Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de asistencia a audiencias en carpeta. Registro en plataforma SIS. Actas de audiencias en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Contribuir desde una mirada técnica y multidisciplinaria en materia de intervención relacionada al maltrato grave y/o abuso sexual infantil, a los Tribunales de Familia y auxiliares de administración de justicia con miras a la interrupción de vulneración y restitución de los derechos.

7. Actividad:

Intervención en crisis por profesionales tratantes hacia el/la NNA y/o Familia.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de intervenciones de crisis en carpeta. Registro en plataforma SIS. Registro de coordinaciones con el intersector Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Realizar contención emocional y acogida inmediata a la situación de crisis, activando a la red intersectorial (salud, educación, justicia, etc.) para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, pudiéndose incluso de ser necesario activar al Tribunal de Familia o demás intervinientes en el proceso.

8. Actividad:

Requerimiento, renovación y/o modificación de medida de protección.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de elaboración de escritos judiciales. Registro en plataforma SIS. Documentos judiciales en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Activar acciones legales que vayan en directo beneficio de garantizar la protección y/o interrupción de una situación de vulneración de derechos en el/la NNA.

9. Actividad:

Oficiar al Tribunal de Familia ante una nueva vulneración de derechos.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de elaboración de escritos judiciales. Registro en plataforma SIS. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Emitir escrito u oficio al Tribunal de Familia dando cuenta de la situación acaecida, solicitando peticiones concretas orientadas a la interrupción de la vulneración y restitución de derecho del NNA.

10. Actividad:

Activación resolución N° 155 en todos aquellos casos donde pueda existir una vulneración de derechos constitutiva de delito.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de activación de resolución exenta N°155. Registro en plataforma SIS. Resolución exenta N°155 en carpeta. Formulario de denuncia del Ministerio Público en carpeta. Correo electrónico remitido al curador ad litem del NNA en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Realizar denuncia ante el Ministerio Público junto con oficio al Tribunal de Familia, permitirán favorecer la interrupción de la vulneración y restablecimiento de los derechos vulnerados del NNA, por medio de las peticiones concretas, en términos tanto de modificación de medida de protección o dictación de medidas cautelares, a la luz de su interés superior.

11. Actividad:

Coordinación con la red intersectorial de apoyo (pública y/o privada), considerando los enfoques transversales.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de coordinación con la red intersectorial en carpeta. Pauta de coordinación en carpeta. Registro en plataforma SIS. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Activar la red intersectorial con el objetivo de triangular información del NNA y fortalecer una red de apoyo a fin de garantizar las medidas psicosociojurídicas adoptadas.

12. Actividad:

Reunión de análisis de caso y/o supervisión clínica de casos, incluyendo los enfoques transversales, según corresponda.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de pauta de análisis de caso en carpeta. Registro de análisis de caso en plataforma SIS. Pauta de análisis de caso en carpeta.

Contribución al logro del objetivo:

Propiciar el análisis de los distintos factores que han contribuido a la existencia de una nueva vulneración, generando nuevas estrategias de intervención a fin de abordar de manera oportuna y apropiada la situación vivenciada y de esta manera garantizar la protección, el bienestar e interés superior del NNA.

13. Actividad:

Derivación a Unidad Parental de adultos referentes significativos.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII.

Medios de verificación:

Pauta de derivación a Unidad Parental en carpeta. Pauta de características del cuidador en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Proporcionar de manera inmediata un espacio de atención, contención, apoyo y reflexión desde el área psicológica al adulto significativo, en consideración de las necesidades individuales visualizadas.

14. Actividad:

Elaboración y remisión de oficio y/o informes (cumplimiento, profundización diagnóstica y/o técnico de victimización) a Tribunales o Fiscalía, según corresponda.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de remisión de oficio y/o informe en carpeta. Registro de remisión de informe en plataforma SIS. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Informar y entregar antecedentes actualizados y atinentes a las instancias judiciales correspondientes con el fin de generar las acciones o medidas necesarias para resguardar el interés superior del NNA.

15. Actividad:

Despeje de las redes familiares.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de coordinación con la red intersectorial en carpeta. Pauta de coordinación en carpeta. Registro en plataforma SIS. Certificado de hijos en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Identificar las redes familiares (solicitud de Certificado de hijos al Tribunal de Familia) a fin de generar nuevas alternativas de cuidado que favorezcan la interrupción de la situación de vulneración, garantizando la situación proteccional de los/las NNA.

16. Actividad:

Intervenciones psicojuridicas con el/la NNA, entregando información judicial considerando su ciclo vital.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de intervención psicojuridica en carpeta. Registro de intervención psicojuridica en plataforma SIS. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Mantener informado al NNA del estado de su situación jurídica proteccional y entregar acompañamiento en situaciones judiciales acorde a su etapa del desarrollo vital (preparación juicio oral y declaración en audiencia de carácter reservado) independiente a la etapa del proceso).

17. Actividad:

Activación de las herramientas jurídicoprocesales pertinentes, en el marco del ordenamiento jurídico chileno.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de remisión de escrito y/o oficio en carpeta. Registro de remisión de escrito y/o oficio plataforma SIS. Oficio, Escrito y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Evacuación de escritos, oficios y/o informes al tribunal de familia, solicitando medidas cautelares, apercibimientos, incidentes, recursos judiciales o cualquier otra herramienta jurídico-procesal que nuestro ordenamiento jurídico contemple, a fin de procurar interrumpir la situación de vulneración y favorecer la restitución de derechos de los/las NNA sujetos de atención.

18. Actividad:

Contacto directo en casos de urgencia, con Magistrado de Turno del Tribunal de Familia Competente.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII. Fase de ejecución de PII. Fase de Seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de remisión de escrito y/o oficio en carpeta. Registro de remisión de escrito y/o oficio plataforma SIS. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Activar a la Magistratura de turno a fin que tome conocimiento inmediato de la situación emergente y urgente de vulneración vivenciada por el/la NNA y determine las medidas necesarias para restituir y/o garantizar los derechos y protección del mismo.

OBJETIVO ESPECÍFICO N°2

Favorecer el proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso en el niño, niña o adolescente y adulto/a responsable.

1. Actividad:

Hora de juego familiar supervisado diagnóstico en sala Gesell, considerando los enfoques transversales.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño de PII.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de Hora de Juego Familiar en Sala Gesell. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Identificar los patrones vinculares en la diada parento/marento filial entre el/la NNA y su adulto referente significativo.

2. Actividad:

Sesiones psicológicas con NNA, considerando los enfoques transversales.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesiones psicológicas con NNA. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Genograma en carpeta. Actividades terapéuticas en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Favorecer la reparación del daño emocional asociado a las vivencias de vulneración de derechos, evitando la victimización secundaria.

3. Actividad:

Aplicación de instrumentos evaluativos a los/las NNA.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño PII.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de devolución de resultados diagnósticos. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Protocolos de test psicológicos en carpeta. Pauta de caracterización actual ex ante en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Generar insumos diagnósticos para el abordaje psicoterapéutico, a fin de co-construir su PII/PIU.

4. Actividad:

Talleres de Terapia Ocupacional con los/las NNA considerando los Enfoques transversales.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de Talleres TO con los/las NNA. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Registro fotográfico. Registro de asistencia a los talleres ejecutados. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Apoyar el proceso de resignificación de los/las NNA a través de la metodología brindada desde el área de Terapia Ocupacional.

5. Actividad:

Sesiones sociales con adultos referentes u otros significativos, considerando los enfoques transversales.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesiones sociales con adultos referentes significativos. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Genograma en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Fortalecer las competencias parentales de los adultos referentes, donde estos logren internalizar y activarse desde la vinculación, afectividad y reflexividad, siendo capaces desde los enfoques transversales, ser entes de protección hacia los/las NNA.

6. Actividad:

Aplicación de instrumentos de evaluación con los adultos referentes significativos.

Etapas de intervención:

Fase de Evaluación de ingreso. Fase de diseño PII.

Medios de verificación:

Registro en Carpeta de instrumentos aplicados. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Protocolos de instrumentos de evaluación (E2P, NCFAS) en carpeta. Pauta de caracterización actual ex ante en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Generar insumos diagnósticos para orientar la intervención con los adultos referentes significativos, permitiendo la coconstrucción del PII/PIU.

7. Actividad:

Sesiones familiares considerando los enfoques transversales.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesiones familiares. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Favorecer la visualización del NNA como víctima y propiciar la incorporación de estrategias de afrontamiento que faciliten su reparación, a fin de evitar la victimización secundaria.

8. Actividad:

Sesión de devolución de resultados de profundización diagnósticos al NNA y co-construcción de PII/PIU, considerando los Enfoques Transversales.

Etapas de intervención:

Fase de diseño del PII.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de devolución de resultados diagnósticos. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Protocolos de test psicológicos en carpeta. Pauta de caracterización actual ex ante en carpeta. Pauta de devolución de profundización diagnóstica y coconstrucción del PII en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Mantener informado al NNA respecto de sus resultados de profundización diagnóstica y favorecer su participación activa en la elaboración de su plan de intervención individual.

9. Actividad:

Sesión de devolución de resultados de profundización diagnósticos con adulto referente y/o familia y coconstrucción de PII/PIU, considerando los Enfoques Transversales.

Etapas de intervención:

Fase de diseño del PII.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de devolución de resultados de profundización diagnósticos. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Protocolos de instrumentos de evaluación (E2P, NCFAS) en carpeta. Pauta de caracterización actual ex ante en carpeta. Pauta de devolución diagnóstica y coconstrucción del PII en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Mantener informado al adulto referente respecto de los resultados de profundización diagnósticos y favorecer su participación activa como cuidador principal en la elaboración del plan de intervención individual.

10. Actividad:

Elaboración y coconstrucción conjunta de PIU con otros intervinientes.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de coconstrucción de PIU. Registro en plataforma SIS. Documento PIU. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Favorecer la coordinación en el desarrollo de objetivos propicios para el proceso de intervención del NNA y su adulto significativo, a modo de, evitar una victimización secundaria.

11. Actividad:

Hora de juego familiar supervisado en fase de intervención en sala Gesell, considerando los enfoques transversales.

Etapas de intervención:

Fase de ejecución de PII.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de Hora de Juego Familiar en Sala Gesell. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Favorecer la vinculación parento filial y marento filial entre el/la NNA y su adulto referente significativo, permitiendo mejorar canales de comunicación.

12. Actividad:

Relación directa y regular (RDR) supervisada en sala Gesell entre el/la NNA y su adulto referente, familia o terceros, cuando la intervención amerite o por orden del Tribunal de Familia.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de RDR supervisada. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Favorecer la vinculación y/o revinculación entre el/la NNA y su adulto referente, familia o terceros, propendiendo la restitución del derecho de vivir en familia y relacionarse con el entorno filial.

13. Actividad:

Sesión de retroalimentación de avances y/o retrocesos en el desarrollo del PII/PIU con NNA, considerando enfoques transversales.

Etapas de intervención:

Fase de diseño del PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de retroalimentación. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Pauta de caracterización ex Ante en carpeta. Pauta de caracterización ex post en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Retroalimentar al NNA respecto de los avances y/o retrocesos de su proceso de intervención psicológica individual, incorporando nuevos elementos de considerar necesario.

14. Actividad:

Sesión de retroalimentación de avances y/o retrocesos en el desarrollo del PII/PIU con adulto referente significativo, considerando enfoques transversales.

Etapas de intervención:

Fase de diseño del PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de retroalimentación. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Pauta de caracterización actual ex ante en carpeta. Pauta de caracterización actual ex post en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Retroalimentar a los adultos referentes significativos de los avances y/o retrocesos del proceso de intervención, incorporando nuevos elementos de considerar necesario.

15. Actividad:

Sesión psicoterapéutica individual con adulto referente en Unidad Parental, considerando los enfoques transversales (cuando el caso está ingresado en Unidad Parental).

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño del PII. Fase de ejecución. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Favorecer espacios de autorreflexión respecto de su funcionamiento psicoafectivo, su historia vital y la identificación de patrones transgeneracionales de protección/desprotección, a modo de,

fortalecer su repertorio emocional y conductual en respuesta a los desafíos del ejercicio de la parentalidad/marentalidad.

16. Actividad:

Elaboración y remisión de oficio y/o informes (cumplimiento, profundización diagnóstica y/o informe técnico de victimización) de carácter psicosociojuridico a Tribunales o Fiscalía, según corresponda.

Etapas de intervención:

Fase de evaluación de ingreso. Fase de diseño del PII. Fase de ejecución. Fase de seguimiento. Fase de Egreso.

Medios de verificación:

Registro de remisión de oficio y/o informe en carpeta. Registro de remisión de informe en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Informar y entregar antecedentes psicosociojuridicos actualizados y atinentes a las instancias judiciales correspondientes con el fin de generar las acciones o medidas necesarias para resguardar el interés superior del NNA.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº3

Fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar psicológico y social del niño, niña o adolescente, víctima de maltrato y abusos.

1. Actividad:

Intervenciones con adultos significativos o familia para la elaboración del Genograma y ecomapa.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de Intervención. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Registro Genograma y Ecomapa. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Generar fortalecimiento y participación de los recursos del adulto significativo y/o familia, además de identificar las redes de apoyo familiares y del entorno (de acuerdo a demanda y respuesta).

2. Actividad:

Visitas domiciliarias con fines de intervención.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de Visita Domiciliaria. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Visualizar el estado socio habitacional del grupo familiar en el cual esté inserto el/la NNA, permitiendo reconocer las condiciones básicas del contexto habitacional, lo que permitirá detectar factores de riesgo o protectores en el entorno, además de favorecer y promover el autocuidado.

3. Actividad:

Intervención psicosocial individuales y/o familiares para activar modelos de crianza y vinculación afectiva y de apego, además de reforzar etapas del ciclo vital de los/las NNA.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de Intervención. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Propiciar condiciones protectoras adecuadas en el/la NNA, modelando estilos de crianza y fortaleciendo vínculos funcionales de apego en los adultos significativos o familia de acuerdo al ciclo vital del NNA.

4. Actividad:

Intervención socio familiar (individual y/o familiar) para fortalecer el trabajo en competencias parentales y parentales.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Propiciar y fortalecer las competencias parentales y parentales donde se logre vincular con redes, género, cultura, inclusión y enfoques transversales.

5. Actividad:

Intervención socio familiar (individual y/o familiar) para trabajar normas y límites, roles claros, dinámicas de interacción.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de Intervención. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Fortalecer en los adultos significativos y/o familias respecto de la implementación de normas y límites propicios, acorde al desarrollo evolutivo del NNA, además de permitir interacciones familiares funcionales.

6. Actividad:

Intervención con el adulto significativo y/o familia para reforzar un lenguaje respetuoso e inclusivo.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de Intervención. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Propiciar y reforzar el lenguaje respetuoso e inclusivo que conlleve al buen trato, fortaleciendo las relaciones familiares.

7. Actividad:

Intervención en crisis frente a situaciones emergentes que pueda presentar el grupo familiar del NNA.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de Intervención. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Acoger las necesidades de crisis o emergentes que puedan presentar la familia del NNA, proponiendo alternativas de solución.

8. Actividad:

Co-construir y revisar el PII/PIU con el adulto referente significativo de forma transversal durante el proceso interventivo.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de la coconstrucción del PII/PIU. Registro en carpeta de la revisión o retroalimentación de PII/PIU. Documento PII/PIU en carpeta. Registro en plataforma SIS. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Retroalimentar y coconstruir el PII/PIU con respecto al proceso y logros alcanzados durante la intervención.

9. Actividad:

Talleres grupales con adultos referentes significativos usuarios de la Unidad Parental.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de talleres Unidad Parental. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Registro fotográfico. Registro de asistencia a los talleres ejecutados. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Fortalecer recursos protectores y competencias parentales/marentales en los adultos referentes significativos, que permitan una internalización de las vulneraciones de los/las NNA, generando cambios activos y crecientes desde los enfoques transversales.

10. Actividad:

Intervención psicosocial con el/la NNA para fortalecer la relación paterno filial y/o marento filial, a través de sesiones lúdicas.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de Intervención. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Fortalecer desde las necesidades del NNA con sus adultos referentes significativos, buscando a través de sesiones lúdicas activar la vinculación, afectividad y participación.

11. Actividad:

Intervención psicosocial con el/la NNA para fortalecer y reconocer las redes intersectoriales, de acuerdo a su desarrollo vital.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión de Intervención. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Propiciar y fortalecer con el/la NNA las redes intersectoriales en su entorno, con la finalidad de que reconozca las redes de apoyo, de acuerdo a su desarrollo vital.

12. Actividad:

Co-construir y revisar el PII/PIU con el/la NNA de forma transversal durante el proceso interventivo.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de la coconstrucción del PII o PIU. Registro en carpeta de la revisión o retroalimentación de PII o PIU. Documento PII/PIU en carpeta. Registro en plataforma SIS. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Hacer parte a los/las NNA de su proceso interventivo en el PRM, donde identifiquen sus necesidades de forma activa y creciente, generando una participación en esta instancia.

13. Actividad:

Talleres de Terapia Ocupacional con los/las NNA para fortalecer autonomía y habilidades sociales de acuerdo a su ciclo vital.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de Talleres grupales con los/las NNA por parte de la TO. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Registro fotográfico. Registro de asistencia a los talleres ejecutados. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Potenciar la autoimagen, autoestima y relaciones interpersonales de los/las NNA con el medio interno y externo.

14. Actividad:

Intervenciones jurídicas con adultos referentes significativos, con el propósito de informar procedimientos jurídicos o legales.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión Jurídica. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Activación por medio de la retroalimentación a los adultos referentes significativos ante los procesos jurídicos asociados o vinculados al NNA.

15. Actividad:

Conversatorio jurídico con los/las NNA a fin de informarlos respecto a su proceso judicial acorde a su rango etario.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de conversatorio Jurídicos con los/las NNA. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Registro fotográfico. Registro de asistencia al conversatorio. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Propiciar y desarrollar los recursos individuales de los/las NNA, dentro de contextos jurídicos, a través de un adecuado lenguaje de acuerdo a su rango etario y guiado desde los enfoques transversales.

16. Actividad:

Elaboración de oficios y/o informes para instancias judiciales, así como para derivaciones a redes intersectoriales.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta del Oficio y/o informe. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Fomentar las instancias de derivación con los intersectores, permitiendo desde los enfoques transversales un trabajo coordinado con todas las redes provinciales y comunitarias.

17. Actividad:

Apoyo social y orientación en la tramitación y/o diligencias que requiera el grupo familiar.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de sesión. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Acompañar y psicoeducar a los adultos referentes significativos, con la finalidad de potenciar y fomentar orientaciones y apoyo desde las redes intersectoriales en beneficio de los/las NNA.

18. Actividad:

Evaluación y derivación de los casos a los intersectores que faciliten la entrega de apoyo social.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en carpeta de Coordinación con las redes intersectoriales. Registro en carpeta de firma de entrega de los beneficios. Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Oficio y/o informe remitido al tribunal de familia en carpeta. Certificado de envío (OJV).

Contribución al logro del objetivo:

Facilitar el acceso de los adultos referentes significativos a las redes intersectoriales, de acuerdo a sus distintos requerimientos, lo que permite potenciar los recursos y disminuir situaciones emergentes, enfocadas principalmente en los/las NNA.

19. Actividad:

Aplicación de Encuesta de Satisfacción al NNA y a su adulto referente significativo.

Etapas de intervención:

Fase de ejecución de PII. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro en plataforma SIS. Documento PII/PIU en carpeta. Documento Encuesta de Satisfacción en carpeta.

Contribución al logro del objetivo:

Insumo que permite visualizar y analizar procesos de intervención desde la visión del NNA y su adulto referente significativo, permitiendo generar cambios en las intervenciones.

20. Actividad:

Talleres de promoción e impacto del daño en contexto de maltrato y abuso con el intersector.

Etapas de intervención:

Fase de diseño PII. Fase de ejecución de PII. Fase de seguimiento. Fase de egreso.

Medios de verificación:

Registro de Talleres grupales ejecutados. Registro fotográfico. Registro de asistencia a los talleres ejecutados.

Contribución al logro del objetivo:

Generar sensibilización y orientación hacia el intersector con la finalidad de activarlos frente a situaciones de maltrato y abuso que puedan ser detectadas en el interno escolar u otros.

El mecanismo que el Servicio y el colaborador acreditado empleará para evaluar su cumplimiento consistirá en la realización de la evaluación del proyecto.

QUINTA: Beneficiarios.

Los beneficiarios serán aquellos indicados en las respectivas bases técnicas correspondiente a la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente **programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave (PRM)**, en el proyecto aprobado por el Servicio y en el Anexo N° 1 denominado “Plazas a licitar y focalización territorial” del décimo segundo concurso público de proyectos, cuya convocatoria fue autorizada por la resolución exenta N°1470, de 27 de diciembre de 2024, modificada por las resoluciones exentas N° 147 y N° 168, ambas de 2025, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que indica lo siguiente:

REGIÓN	CÓDIGO LICITACIÓN	LÍNEA DE ACCIÓN	MODALIDAD	M O D E L O	COMUNA BASE PREFERENTE	FOCALIZACIÓN	COBERTURA	EDAD	SEXO	FACTOR ZONA	COSTO NIÑO MES	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL	MONTO PERÍODO A LICITAR	PERÍODO A LICITAR
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	1857	INTERVENCIONES AMBULATORIAS DE REPARACIÓN	PRM – PROGRAMA ESPECIALIZADO EN MALTRATO	PRM	PUNTA ARENAS	PROVINCIA MAGALLANES	75	0 A 17 AÑOS, 11 MESES, 29 DÍAS	A	56%	\$ 330.827	\$24.812.637	\$297.751.641	\$297.751.641	1 AÑO

La atención se prestará bajo la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, específicamente programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave y el Servicio atenderá en el programa 75 plazas.

SEXTA: Monto, forma y requisitos para el pago.

Los aportes financieros otorgados por este Servicio se determinarán de acuerdo a lo señalado en los artículos 29 y 30 de la ley N°20.032 y su reglamento, contenido en el decreto supremo N° 19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Subsecretaría de la Niñez. El aporte financiero del Estado se expresa en Unidades de Fomento y será calculado y se actualizará considerando el valor que dicha unidad registre al 1 de enero del año correspondiente.

Para el año 2025 el valor de la Unidad de Fomento al 1 de enero corresponde a \$38.419,17.

Para el cálculo del valor efectivo de los aportes financieros del Estado de la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, modelo de intervención Programas de Protección Especializada, se aplicará la siguiente fórmula de cálculo:

*Aporte financiero = #NNA Atendidos * Valor Base * (1 + ∑ Factores del criterio)*

Por “NNA atendidos”, se entenderá a los niños, niñas y adolescentes atendidos en el mes, los que no podrán superar las plazas convenidas. De conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la ley N° 21.302, se entenderá por niños y niñas a toda persona menor de 14 años y por adolescente a toda persona que tenga catorce años o que siendo mayor de catorce años, no haya cumplido los dieciocho años de edad. No obstante, seguirán siendo sujetos de atención del Servicio quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, ellos serán sujetos de atención hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.

Para el cálculo del valor de los aportes financieros del Estado a transferir a los colaboradores que desarrollen programas de protección especializada se considerarán los siguientes valores y criterios:

Programas	Valor Base UF Mensual	Criterio
Programas de protección especializada	5,52	Lugar

Tablas: criterios, categorías y factores:

Categoría para asignación del criterio lugar: este criterio está referido a la ubicación donde se desarrollará el respectivo proyecto, de acuerdo al cuadro establecido en el artículo 10 del reglamento de la ley N° 20.032, aprobado por el decreto supremo N° 19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia – Subsecretaría de la Niñez-.

En el Reglamento ya citado se encuentra el listado correspondiente a las regiones, provincias comunas o ciudades con las categorías correspondientes.

Los factores asociados a cada tipo de lugar serán los siguientes:

Categoría	Factor
Lugar A	0%
Lugar B	14%
Lugar C	28%
Lugar D	56%
Lugar E	84%
Lugar F	100%

Este criterio se aplicará todos los modelos de intervención de las líneas de acción. Este criterio incluye la disponibilidad y costos de los recursos humanos y materiales necesarios en la localidad en que se desarrollará el proyecto de conformidad a lo previsto en el número 3 del artículo 29 de la ley N° 20.032.

Los programas de esta línea de acción se pagarán por niño, niña y adolescente atendido en el mes, los que no podrán superar las plazas convenidas. De conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la ley 21.302, se entenderá por niños y niñas a toda persona menor de 14 años y por adolescente a toda persona que tenga catorce años o que siendo mayor de catorce años, no haya cumplido los dieciocho años de edad. No obstante, seguirán siendo sujetos de atención del Servicio quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, ellos serán sujetos de atención hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de la ley N° 20.032, el colaborador acreditado deberá cumplir los siguientes requisitos para el pago:

a) Contar con un 75 por ciento del personal conformado por profesionales y/o técnicos especializados acordes a la respectiva línea programática, incluyendo a quienes trabajen en trato directo con los niños, niñas y adolescentes.

La especialización deberá acreditarse, ante el Servicio, mediante los respectivos títulos profesionales de grado y certificados de especialización o postgrado que lo avalen, con determinación específica y detallada del ámbito de su experticia. Tales antecedentes estarán disponibles para las autoridades competentes que los requieran.

b) Comparecer sus profesionales o peritos a declarar ante el tribunal a las audiencias a las que se les cite en razón de su cargo o experticia, eximiéndose de esta obligación sólo cuando el tribunal los libere de ella, lo que será debidamente acreditado con copia autorizada de la respectiva resolución judicial que así lo señale.

c) Cumplir las respectivas pericias o informes de seguimiento de avance de intervenciones con los estándares requeridos para tener valor probatorio. De no hacerlo, el tribunal deberá remitirlos al Director Nacional del Servicio, con copia al Director Regional correspondiente, a efectos de suspender los respectivos pagos al colaborador, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que correspondan, las cuales el juez sugerirá cuando se trate de una práctica frecuente del respectivo programa.

Si en la fiscalización a la que se refiere el artículo 39 de la ley N°21.302, se identifica el incumplimiento de alguna exigencia, el Servicio podrá retener el pago de los recursos a los que se refiere este artículo hasta en el 50 por ciento, hasta que el colaborador acreditado disponga de las medidas necesarias para cumplir con la exigencia no satisfecha. En tal caso, el Servicio deberá contar con planes de asesoría y mejoramiento para asegurar que el colaborador acreditado cumpla con las exigencias no satisfechas en la fiscalización.

El Servicio transferirá el monto de los aportes financieros del Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 de la ley, en forma mensual, y dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al mes de entrada en vigencia del convenio respectivo, siempre que el colaborador acreditado que ejecuta el proyecto haya informado las atenciones en los plazos establecidos por el Servicio, y así sucesivamente, a excepción de los proyectos de emergencia, que se regirán por lo establecido en los respectivos convenios.

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá anticipar el monto de los aportes financieros del Estado equivalentes a un mes y sólo al inicio del proyecto previo requerimiento fundado del colaborador acreditado, debiendo regularlo en el convenio que se suscribirá con el Servicio. Dicho anticipo será descontado a partir de la segunda transferencia que le corresponda percibir al colaborador acreditado, en un máximo de seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

El monto de los aportes financieros del Estado se transferirá directamente a la cuenta corriente habilitada por el colaborador acreditado para la ejecución del respectivo proyecto, en conformidad a las obligaciones contenidas en los convenios suscritos con el Servicio y a los procedimientos específicos establecidos para las diferentes líneas de acción, los que se determinarán a través de la normativa técnica y administrativa impartida por este último.

El Servicio pagará mensualmente hasta la cobertura máxima establecida en los convenios. Una vez determinado el monto mensual a pagar por concepto de aportes financieros del Estado, el Servicio emitirá una liquidación de pago.

Para efectos del pago de un determinado proyecto, los colaboradores acreditados deberán informar los ingresos y egresos de niños, niñas y adolescentes, y la población atendida mensualmente. La entrega de la información deberá realizarse digitalmente.

Los destinatarios de los aportes financieros del Estado acreditarán mensualmente el monto de los aportes financieros del Estado percibidos mediante la emisión de un comprobante de ingreso, cuyo original deberá ser remitido a la Dirección Regional respectiva del Servicio.

En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 18 de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, (aplica dictamen N° 51.246, de 2016).

El monto niño/mes de los recursos a transferir para el año 2025, será el siguiente:

El monto niño/mes del aporte financiero, corresponde a **8.611 UF mensuales**, el que considera el porcentaje del factor correspondiente a la categoría asociada referida al criterio lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto supremo N° 19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia- Subsecretaría de la Niñez.

SÉPTIMA: De las principales obligaciones del colaborador acreditado.

Durante la ejecución del proyecto, el colaborador se compromete a cumplir especialmente las siguientes obligaciones:

- 1) Atender a un niño, niña o adolescente, por derivación del Tribunal de Familia respectivo, que es el órgano judicial competente para conocer de las medidas proteccionales a que se refieren las letras c) y d) del artículo 71 y artículo 80 bis, ambos de la ley N° 19.968; y por derivación de Oficinas Locales de la Niñez respectivas (en la medida que dichos organismos se encuentren implementados). Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad del Director Regional del Servicio, para asignar cupos en proyectos de programas de Protección Especializada, conforme al artículo 19 de la Ley N°21.302.

Los ingresos por derivación del Ministerio Público o Fiscalía, sólo procederán en la medida que dicho organismo remita los antecedentes al Tribunal de Familia respectivo, a fin de que éste último dicte la resolución correspondiente, por cuanto, es el órgano judicial competente para conocer de las medidas proteccionales a que se refieren las letras c) y d) del artículo 71 y artículo 80 bis, ambos de la ley N° 19.968.

- 2) Los directores o responsables de los proyectos de protección especializada y los profesionales que de atención directa a los niños, niñas y adolescentes en alguna de las líneas de acción señaladas por la ley N°20.032, que tengan conocimiento de una situación de vulneración a los derechos de algunos de ellos, que fuere constitutiva de delito, deberán denunciar de inmediato esta situación a las autoridades competentes, según lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Procesal Penal. En estos casos, así como en aquellas situaciones que, no siendo constitutivas de delito, vulneren sus derechos, los directores o responsables de los proyectos respectivos deberán solicitar al tribunal competente la adopción de medidas de protección a favor del niño, niña o adolescente víctima, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ocurrencia del o los hechos respectivos.

El incumplimiento de los deberes establecidos en los incisos precedentes, además de las sanciones penales que correspondan, constituyen una falta grave sancionada de conformidad con lo prescrito en el artículo 41 de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica.

Cualquier entorpecimiento o retardo injustificado que impida el libre acceso de los profesionales, públicos o privados, que ejerzan la defensa jurídica del niño, niña o adolescente, con el fin de tener, en cualquier momento, comunicación personal, directa y reservada con aquéllos, independientemente de que cuenten con mandato judicial expreso o actúen como agentes

oficiosos, será sancionado como falta grave de conformidad con lo prescrito en el artículo 41 referido precedentemente.

3) Efectuar una rigurosa selección de personal, mediante la aplicación de tests psicológicos y estudio de sus antecedentes personales y laborales, con el fin de asegurar la competencia para la función a desempeñar y de descartar características o patologías que puedan constituir riesgo para los beneficiarios o las beneficiarias atendidos. Asimismo, deberá ejecutar un riguroso proceso de inducción inicial a todo el personal en materias referidas al respeto estricto de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

4) Velar porque las personas que en cualquier forma presten servicios en la atención de niños, niñas y adolescentes demuestren idoneidad para el trato con ellos y, en especial que no hayan sido condenadas, se encuentren actualmente procesadas, ni se haya formalizado una investigación en su contra por crimen o simple delito, que por su naturaleza ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de éstos o de confiarles la administración de recursos económicos. Para tal efecto, será su obligación solicitar a los postulantes que intervendrán en los proyectos, el certificado de antecedentes para fines especiales - con una antigüedad no superior a 30 días desde que comiencen a prestar atención a niños, niñas o adolescentes - a que se refiere el artículo 12 letra d) del decreto supremo N° 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, sobre prontuarios penales y certificados de antecedentes y a consultar al Registro previsto en el artículo 6° bis del decreto ley N° 645, de 1925, sobre Registro Nacional de Condenas, - al momento de la selección del personal y mantener con la debida periodicidad control sobre la mantención de esta circunstancia. Semestralmente, el organismo colaborador acreditado deberá consultar el registro previsto en el artículo 6 bis del decreto ley N° 645, del Ministerio de Justicia, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, respecto de las personas que, en cualquier forma, les presten servicios en la atención de niños, niñas y adolescentes.

Al efecto, deberá requerir a los interesados una declaración jurada simple que exprese la circunstancia de no encontrarse procesado o formalizado por crimen o simple delito que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención de éstos o de confiarles la administración de recursos económicos. Deberá solicitar antes de efectuar la contratación a las personas que en cualquier forma presten servicios en la atención de niños, niñas y adolescentes, información acerca de si el postulante se encuentra afecto a la inhabilitación prevista en el artículo 39 bis del Código Penal, consultando, a este respecto, la sección del Registro de Condenas denominada "Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad" (artículo 39 bis del Código Penal). Asimismo, deberán solicitarles semestralmente, la presentación de un certificado de antecedentes para fines especiales, con el objeto de llevar, con la periodicidad de 6 meses, control sobre la mantención de las circunstancias descritas precedentemente. Con igual periodicidad, deberá requerir a los interesados, una declaración jurada simple, que exprese la circunstancia de no encontrarse procesado o formalizado por crimen o simple delito, que por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de éstos o de confiarles la administración de recursos económicos.

Asimismo, el colaborador no podrá contratar a personas que presten servicios en labores de atención o trato directo de niños, niñas y adolescentes en este proyecto, que tuvieren

dependencia grave de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico o sea consumidor problemático de alcohol. De conformidad con lo anterior, el colaborador deberá requerir a los interesados, una declaración jurada simple, en la que se exprese tal circunstancia, debiendo en caso de que esté sometido a tratamiento, acompañar la certificación médica correspondiente.

- 5) Destinar los aportes financieros que transfiere el Servicio, al cumplimiento de los fines de protección especializada, pudiendo destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo al cumplimiento de dichos fines.

La supervisión financiera y la fiscalización del gasto, se orientará a verificar el buen uso de los recursos transferidos.

- 6) Proporcionar la información técnica y financiera requerida por el Servicio, para la realización de la supervisión y fiscalización de las acciones relacionadas con los niños, niñas o adolescentes, conforme a la normativa que regula las acciones del Servicio en esta materia.

- 7) Rendir cuenta mensualmente, conforme a las normas e instrucciones sobre rendición de cuentas de fondos transferidos en virtud de la Ley N° 20.032, contenidas en dicha normativa, en la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, y en las resoluciones exentas N°s 264 y 404, de 2024, de la Dirección Nacional del Servicio, o aquella que la modifique o reemplace, en todo lo que no se oponga a las disposiciones antes señalada.

El colaborador acreditado no podrá recibir nuevos aportes financieros del Estado mientras no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de los montos transferidos, y deberá restituir los respectivos fondos cuando aquélla no se ajuste a los objetivos de los proyectos.

- 8) Conservar la documentación constitutiva de la rendición de cuentas en el mismo orden del registro de ingresos y egresos, y mantenerla permanentemente a disposición de los supervisores del Servicio, de la Subsecretaría de la Niñez y de la Contraloría General de la República.

- 9) Acreditar mensualmente el monto del aporte financiero percibido mediante la emisión de un comprobante de ingreso cuyo original deberá ser remitido a la Dirección Regional respectiva del Servicio. Los colaboradores acreditados estarán obligados a llevar un registro de ingresos y egresos de los montos de los aportes financieros recibidos e informar sobre la aplicación de los mismos. En el registro antes señalado se deberán consignar, en orden cronológico, el origen y monto detallado de los aportes financieros recibidos, el monto detallado de los egresos, señalando su objetivo, uso y destino, con individualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contabilidad que registren los pagos realizados cuando correspondan; y el saldo disponible. Asimismo, deberán remitir al Servicio un informe mensual, el que deberá señalar, a lo menos, el saldo inicial de los fondos disponibles, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto de los egresos realizados, el detalle de estos, y el saldo disponible para el

mes siguiente. El Servicio determinará la forma y contenidos específicos del informe mensual a que se refiere el inciso anterior y la oportunidad en que deberá ser presentado.

10) Reintegrar a la cuenta corriente del proyecto los dineros provenientes de los aportes financieros del Estado, a fines distintos a los contemplados en el artículo 26 bis de la Ley N°20.032, o que, habiéndolos destinado a dichos fines, no tuvieran los respectivos documentos de respaldo en original. En caso de que al término de un proyecto resultaren excedentes o saldos no utilizados, los organismos colaboradores podrán hacer uso de dichos fondos en otros proyectos bajo su administración, con el objeto de mejorar la calidad de la atención brindada a los niños, niñas y adolescentes en dichos proyectos. En caso de no ser utilizados dichos recursos en otros proyectos, deberán ser reintegrados al Servicio. El traspaso de fondos públicos entre proyectos de un mismo Organismo Colaborador se realizará con la previa autorización del Jefe Superior del Servicio mediante Resolución Exenta y se informará bimensualmente a la Dirección de Presupuestos, detallando los montos traspasados por proyecto. Se excluyen de estos casos los fondos que hayan quedado excedentes derivados de la ejecución de proyectos de Emergencia. Lo señalado en este numeral respecto de los excedentes o saldos no utilizados procederá conforme lo dispone la Glosa N°04, Partida 21, Capítulo 11, Programa 01, Subtítulo 24 del presupuesto identificado para este Servicio para el año 2025, por lo que, para los próximos períodos presupuestarios que se encuentre en ejecución el convenio para aplicar esta facultad deberá revisarse la ley de presupuestos dictada cada año.

11) Los organismos públicos receptores de recursos provenientes de transferencias, que deban reintegrarlos a rentas generales de la nación, porque no han sido utilizados o por cualquier otro motivo, deberán hacerlo, a más tardar, dentro del mes siguiente al cierre de la rendición de cuentas del respectivo convenio. El proceso de rendición de cuenta no podrá extenderse por más de seis meses contados desde la finalización de la ejecución del convenio.

Los receptores privados que se encuentren en la obligación de restituir recursos transferidos deberán hacerlo al organismo público correspondiente, dentro del plazo máximo de sesenta días hábiles contado desde el término del respectivo convenio. Luego de la recepción de los recursos, el organismo público deberá reintegrar dichos recursos a rentas generales de la Nación, a más tardar al mes siguiente de su recepción.

En el caso de los organismos públicos, se entenderá por recursos transferidos no utilizados, los saldos no utilizados al término de la ejecución de las actividades convenidas. Si se trata de instituciones privadas, serán los que se encuentren en dicha situación al término del respectivo convenio.

12) Deberá darse cumplimiento a la resolución exenta N° 309, de fecha 24 de marzo de 2023, de esta Dirección Nacional que aprueba el Instructivo de registro, control, traspaso y baja de bienes inventariables de los colaboradores acreditados, así como cualquier modificación o nueva regulación en torno a esta materia y toda instrucción complementaria que en el Servicio disponga.

- 13) Hacer devolución de los bienes muebles que se adquirieron con los fondos otorgados por el Servicio, para el cumplimiento del respectivo proyecto, al término de la ejecución de éste, a fin de que el Servicio, conforme a criterios técnicos, resuelva sobre su posterior destinación.
- 14) Dejar claramente establecido que se trata de un proyecto financiado con aportes financieros del Estado transferidos por el Servicio, en todas las actividades que desarrolle e incorporar la imagen corporativa del Servicio en todo el material gráfico que edite, e incluir en los establecimientos o centros donde funciona el proyecto, la señalética que se describe en el “Manual de Normas Gráficas señalética de instituciones acreditadas”, disponible en la página Web del Servicio con posibilidad de poner el nombre del proyecto “de fantasía”.
- 15) Mantener actualizada la información de acuerdo a lo que señala la ley N°20.032, y a las exigencias previstas en la ley N°19.862, que establece Registros de las personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, y su reglamento, contenido en el decreto supremo N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda.
- 16) Informar mensualmente de la atención brindada, para efectos del pago, según las orientaciones recibidas desde el Servicio.
- 17) Llevar un registro general, permanentemente actualizado, de las derivaciones realizadas, por un lado, por las Oficinas Locales de la Niñez y, por el otro, por los tribunales competentes; de la fecha de recepción de las derivaciones; de la o las personas responsables de asignar los casos a los profesionales competentes; de la fecha en que se realizó tal asignación y los profesionales asignados a cada caso; de la fecha de inicio de la atención al niño, niña o adolescente y a su familia; del número y fecha de las intervenciones realizadas y de las personas a quienes ellas estuvieron destinadas; del número de la carpeta del caso de cada niño, niña o adolescente atendido, la que deberá encontrarse siempre actualizada, y los demás contenidos que determine el reglamento respectivo. Este registro, así como la carpeta individual de los niños, niñas y adolescentes atendidos, será de libre acceso para los fiscalizadores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la Dirección Nacional, las direcciones regionales y los supervisores y fiscalizadores del Servicio; para la Defensoría de los Derechos de la Niñez y para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los jueces de familia, los abogados patrocinantes de los niños, niñas y adolescentes y sus curadores ad litem, en las causas que tramiten respecto de los niños, niñas y adolescentes que representan, tendrán siempre acceso al registro y a las carpetas individuales antes mencionadas, pudiendo solicitar su envío al tribunal. Todas las personas que, de acuerdo con los incisos precedentes, accedan a la información en ellos referida, quedarán sujetos al deber de reserva y confidencialidad establecido en el inciso segundo del artículo 33 la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, sancionándose su infracción del modo prescrito en el inciso cuarto de dicha norma. En el caso de los jueces de familia, éstos se registrarán de conformidad con las normas de reserva establecidas en el artículo 15 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia. El incumplimiento de los deberes de registro y actualización, así como cualquier entorpecimiento o retardo en el acceso a ellos a las personas que tienen derecho a ello, será sancionado como

falta grave de conformidad con lo prescrito en el artículo 41 de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica.

18) Operar y mantener actualizada en forma permanente, según las instrucciones y condiciones de uso que imparta el Servicio sobre la materia, toda la información requerida por el Sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo de Servicio previsto en la Ley N°21.302, el cual estará disponible desde el momento de inicio de los proyectos, a través del sitio web sis.mejorninez.cl. El colaborador acreditado será responsable de la veracidad, exactitud, contenido y oportunidad de la información que proporcione. La información contenida en el referido sistema será de propiedad exclusiva del Servicio.

19) Cumplir las normas e instrucciones generales y particulares que imparta el Servicio, de conformidad a la normativa vigente. Asimismo, deberán proporcionar la información que el Servicio requiera, ajustándose y colaborando con su supervisión y fiscalización técnica y financiera.

El no cumplimiento de lo dispuesto dará lugar a las sanciones consagradas en el artículo 9 bis y 37 de la ley N°20.032.

20) Velar por el correcto uso de los aportes financieros, procurando que esta no sea objeto de gravamen, embargo, condición o cualquier otra limitación que afecte o limite su uso o destino, debiendo, en caso de decretarse embargo u otra limitación cualquiera sea su origen, informar dentro de las 48 horas siguientes a la Dirección Regional del lugar donde se ejecuta el proyecto afectado. En dicha situación, el Servicio evaluará técnica y financieramente la procedencia del gasto que originó la afectación de la subvención pudiendo exigir la restitución de los recursos, si de los antecedentes aparece que no se ha ajustado a los objetivos del proyecto.

21) Destinar los aportes financieros del Estado en los contratos de arrendamiento que celebre para la ejecución del proyecto respectivo, exclusivamente en aquellas prestaciones que, con arreglo a las normas contenidas en el Código Civil, sean de cargo del arrendatario, estas son las "reparaciones locativas", previstas en el artículo 1940 del citado cuerpo legal, salvo autorización previa del Servicio.

22) Dar cumplimiento a las observaciones emanadas del proceso de evaluación ex ante de la propuesta adjudicada, por parte de la Comisión de Evaluación, que serán debidamente informadas por la Dirección Regional de la Región respectiva; las que serán objeto de las respectivas supervisiones técnicas o financieras, según corresponda, que se practiquen en esta Dirección Regional; con el objeto de que este Servicio vele para que la acción desarrollada por sus colaboradores acreditados, respete y promueva los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención y se ajuste a lo dispuesto en la Ley N° 20.032 y en las demás disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la labor que ellos desempeñan.

23) Dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución exenta N° 155, de 2022, modificada por la resolución exenta N°307, de 2022, de la Dirección Nacional del Servicio, que aprueba

procedimiento ante hechos eventualmente constitutivos de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran atendidos en colaboradores acreditados del Servicio nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, así como cualquier modificación o nueva regulación en torno a esta materia y toda instrucción complementaria que en el Servicio disponga respecto a los flujos e información a entregar ante estos hechos

- 24) Asegurar, los derechos laborales y el cumplimiento de las normas laborales y previsionales, respecto de los trabajadores que laboran en el proyecto, en el marco de la relación contractual que mantienen.
- 25) Utilizar la información proporcionada por el Servicio, sólo para los efectos de dar cumplimiento a los fines propios de este convenio, quedando prohibido todo uso distinto del señalado. En dicho entendido, el colaborador acreditado, deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes o información que el Servicio le proporcione con motivo del presente convenio, no pudiendo hacer uso de éstos para fines ajenos al mismo, y en consecuencia, no podrá, a cualquier título y/o medio revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea durante la vigencia del convenio, como después de su término. Esta prohibición afecta al colaborador acreditado, al personal que labora en distintas calidades jurídicas, que se encuentre ligado al convenio, en todas sus etapas, incluso después de la expiración del mismo. El Servicio quedará liberado de toda responsabilidad por el uso indebido que el colaborador acreditado, pueda dar a la información, reservándose el derecho a ejercer todas las acciones legales tendientes a demandar el reembolso de las sumas a las que eventualmente sea obligado a pagar como consecuencia de lo anterior, más la indemnización de los perjuicios que se hubieren ocasionado.
- 26) Dar cumplimiento a la resolución exenta N° 149, de 2022, de la Dirección Nacional del Servicio, que aprueba el procedimiento ante el fallecimiento de niños, niñas y adolescentes atendidos por el Servicio o por los colaboradores acreditados, así como cualquier modificación o nueva regulación en torno a esta materia y toda instrucción complementaria que en el Servicio disponga respecto a los procedimientos e información a entregar ante este hecho.
- 27) Proporcionar, a requerimiento del Servicio, y dentro del plazo que se le fije para ello, todas las copias digitalizadas, o en caso que no fuere posible, de todas las fotocopias legibles de la información que debe ingresarse en el Sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo de Mejor Niñez, disponible a través del sitio web www.sis.mejorninez.cl, tales como información del proyecto, de los niños, niñas y adolescentes atendidos, de la gestión comunitaria - intersectorial, del funcionamiento del proyecto y de los aspectos administrativos, financieros y contables del mismo, que le han sido requeridos a este Servicio, en el contexto de la tramitación de una solicitud de acceso a la información, regida por la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, debiendo proceder a entregar dichos antecedentes al funcionario dependiente de esta Institución, que lo requiera por cualquier medio idóneo. En el caso de que todo o parte de dicha documentación ya no exista en poder del organismo colaborador —por expurgación autorizada por la Contraloría General de la República o por otro motivo calificado—

, deberá informar dicha circunstancia fundadamente y por escrito, dentro de mismo plazo a quien lo requirió. El Servicio deberá adoptar todas las medidas de resguardo respecto de los datos personales y sensibles que contenga dicha información, de conformidad a la normativa vigente, procediendo previamente a su entrega, al tarjado pertinente.

- 28) Todo directivo, profesional y persona que se desempeñe en organismos colaboradores deberá observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de sus funciones con preeminencia del interés general sobre el particular.
- 29) Velar por el trato digno evitando la discriminación y la estigmatización de los sujetos de atención y de su familia. Deberán recibir en todo momento y en todo medio el trato digno que corresponda a toda persona humana. Particular cuidado se deberá tener en las medidas, informes o resoluciones que produzcan efecto en las decisiones de separación familiar.
- 30) Informar y tener en cuenta la opinión del niño, niña y adolescente respecto a los procesos de intervención que le atañen, en función de su edad y madurez.
- 31) Dar cumplimiento al procedimiento, aprobado a través de la resolución exenta N° 619, de 2022, de este Servicio, o toda otra, que la modifique o la reemplace, que regula la forma de cumplir por parte de los colaboradores acreditados con la obligación establecida en el artículo 15 de la ley N° 20.032 y el artículo 20 del decreto supremo N° 20, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que aprueba el reglamento sobre normas para la operación y adecuado funcionamiento de los registros del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
- 32) Dar cumplimiento a los estándares de los programas de las líneas de acción contempladas en el artículo 18 de la ley N° 21.302, los que consisten en las condiciones mínimas y comunes que deben ser consideradas por el Servicio en el diseño de la oferta programática de protección especializada, así como en las bases administrativas y técnicas de las convocatorias que efectúe el Servicio para la ejecución de los programas de protección especializada, y en las obligaciones de los convenios suscritos con los colaboradores acreditados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N° 20.032.

Dichos estándares se contienen en el decreto supremo N°5, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia – Subsecretaría de la Niñez- que aprobó el reglamento que fija estándares para los programas del Servicio, los que se aplicarán a través de las siguientes dimensiones:

- a) Enfoques transversales.
- b) Organización interna.
- c) Gestión del equipo ejecutor.
- d) Gestión de la información.
- e) Ámbito de intervención.
- f) Ambientes adecuados para la niñez y adolescencia.
- g) Ámbito de participación.
- h) Medios y protocolos de actuación ante situaciones especiales.

Los medios e indicadores específicos para verificar el cumplimiento de los estándares se regirán por lo establecido en dicho reglamento y conforme a lo previsto en la matriz para la determinación del cumplimiento de los estándares para la acreditación de colaboradores y para la ejecución de los programas de las líneas de acción, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, para el bienio 2022-2023, aprobada por Resolución Exenta N°18, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia – Subsecretaría de la Niñez-la que se entiende formar parte integrante del presente convenio.

En relación con el estándar “colaboración activa en la supervisión y asesoría”, los ejecutores deberán dar cuenta del cumplimiento de este estándar a través de informes periódicos que serán remitidos al Servicio, una vez al año en el mes de junio, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N°5, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia – Subsecretaría de la Niñez.

33) Imputar los pagos efectuados al fondo de cesantía, previsto en el artículo 13 de la ley N°19.728, (que estableció un seguro de desempleo o cesantía, en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo), efectuados con cargo a los aportes financieros que este Servicio le transfiere, a la indemnización por años de servicio que corresponde al trabajador desvinculado por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa. (Aplica Dictamen N°8.583, de 27 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República).

34) **En caso de tratarse de un organismo de la administración del Estado:** Velar por el estricto cumplimiento del “principio de la probidad administrativa”, especialmente en lo que concierne a la observancia de todas las prohibiciones o limitaciones establecidas por la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, como las consagradas en el Estatuto Administrativo, que afectan a los trabajadores de la Administración del Estado, que se desempeñen en cualquier calidad. En especial, se deberá tener en cuenta la incompatibilidad general entre todos los empleos o funciones que se presten al Estado, salvo con el ejercicio de funciones a honorarios, siempre que se efectúen fuera de la jornada de trabajo.

OCTAVA: Del personal.

El personal que los colaboradores acreditados contraten para la ejecución de los proyectos no tendrá relación laboral alguna con el Servicio, sino que exclusivamente con dichos colaboradores, siendo responsabilidad de estos el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales.

El Servicio no podrá intervenir en materias de orden laboral ni relativas a la relación contractual establecida entre los colaboradores acreditados y sus trabajadores, sin perjuicio de la supervisión del gasto y de la calificación técnica de su personal comprometida en el respectivo proyecto.

El colaborador deberá informar a la Dirección Regional respectiva, cualquier modificación en la dotación y configuración de los equipos profesionales del proyecto, de tal forma que si el equipo ejecutor a cargo abandona o cesa sus funciones por cualquier causa, éstos deberán ser reemplazados

por personal que cumpla con los mismos perfiles que el colaborador se comprometió en su formulario de presentación de proyectos y sus anexos, por lo tanto, a fin de salvaguardar la equivalencia curricular, deberá remitir los antecedentes del nuevo personal a contratar, pudiendo la Dirección Regional, objetarlo si no se ajusta al perfil comprometido por el colaborador, en el proyecto adjudicado y convenido.

Las personas jurídicas que se desempeñen como organismos colaboradores del Estado serán civilmente responsables por los daños, judicialmente determinados, que se hayan ocasionado a raíz de vulneraciones graves de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes causados tanto por hechos propios como de sus dependientes, salvo que pruebe haber empleado esmerada diligencia para evitarlas. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil que por los mismos hechos pueda corresponderle a la persona natural que ejecutó los hechos.

Los trabajadores de los colaboradores acreditados deberán velar por el cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 54 de la Ley N°21.302, esto es:

- 1.- El colaborador deberá contar con personal capacitado e idóneo según los términos requeridos para el ejercicio de sus funciones.
- 2.- El personal deberá actuar conforme a los objetivos y principios establecidos en la ley, y tratándose del personal de la Administración del Estado, su incumplimiento será considerado como infracción grave al principio de probidad administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 62, número 8, de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y 125 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
- 3.- El personal que tenga trato directo con niños, niñas y adolescentes, deberá tener una salud mental y física comprobable compatible con el cargo, y las cualificaciones técnicas y/o profesionales necesarias para un correcto ejercicio del mismo. En razón de lo anterior, el personal deberá someterse cada dos años a una evaluación de salud física y mental.

NOVENA: Del término unilateral y modificaciones de convenio.

El Servicio estará facultado, según los artículos 37 de la ley N° 20.032 y 41 de la ley N° 21.302, para poner término anticipado al presente convenio, dando el aviso correspondiente al colaborador acreditado con 60 días hábiles, de anticipación, o modificarlo, en cualquiera de las siguientes situaciones, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula novena de este instrumento:

- a) Cuando los objetivos no sean cumplidos, o los resultados no sean alcanzados en el grado acordado como mínimamente satisfactorio, o cuando los derechos de los niños, niñas o adolescentes no estén siendo debidamente respetados.

b) Cuando las instrucciones impartidas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 bis de la Ley N° 20.032, no hubieren sido ejecutadas en el plazo señalado por el Servicio.

c) Cuando el personal de los colaboradores acreditados que contraten para la ejecución del respectivo convenio figure en el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad o en el registro de condenados por actos de violencia intrafamiliar establecido en la ley N° 20.066 o haya sido condenado por crimen o simple delito que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas o adolescentes.

El término anticipado de los convenios será obligatorio si durante su ejecución, se producen vulneraciones graves a los derechos fundamentales de alguno de los niños, niñas o adolescentes, atribuibles a la responsabilidad del organismo colaborador en los términos establecidos en el número 6) del artículo 2 de la Ley N° 20.032, conforme a lo determinado en una sentencia judicial.

En caso de incurrir en infracciones graves, se deberá aplicar el término anticipado y unilateral de los convenios que correspondan, en los casos contemplados en los ordinales ii, iii y iv del inciso quinto del artículo 41 de la Ley N° 21.302.

De igual manera, se podrán producir modificaciones al convenio como resultado de las observaciones de la Evaluación de Desempeño, bajo las mismas condiciones descritas anteriormente.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero de esta cláusula, la dirección regional respectiva, en el ejercicio de sus facultades propias, podrá poner término unilateral de los convenios, mediante resolución fundada, atendidos graves incumplimientos imputables al colaborador, en plazos inferiores a los 60 días, para lo cual deberá contar con un informe técnico y/o financiero de dicha instancia regional, el que deberá dar cuenta fundadamente de los hechos en que se sustenta la decisión de término, constitutivos de fuerza mayor - que resultan atentarios en contra de la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico clínico, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones, que debe garantizar este Servicio, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 21.302, y en contra de la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contemplados en la ley N° 21.430, constando la fecha a contar de la cual se hará efectivo el término, debiendo notificar el acto administrativo que disponga el término del convenio respectivo, al colaborador, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.880.

En estos y todos aquellos casos en que sea procedente, los colaboradores podrán reclamar de las resoluciones del Servicio, conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.880.

Asimismo, si el colaborador acreditado le comunica a este Servicio su intención de no continuar con la ejecución del proyecto antes de su fecha de término, por cuanto existen hechos que hacen imposible llevar a buen término su ejecución, se obliga a notificar al Servicio, con el objeto de que sea éste quien adopte la decisión de poner término o no al convenio, por escrito mediante carta dirigida

al Director Nacional o Director/a Regional, con, a lo menos, 60 días hábiles de anticipación, debiendo lograr la ubicación de los niños y adolescentes en otros proyectos de similares características, conforme al plan de intervención individual (PII) respetando la zona geográfica de procedencia de los/as niños y adolescentes atendidos.

Las referidas modificaciones y términos de convenio deberán aprobarse por acto administrativo totalmente tramitado, (aplica dictamen N° 8.501, de 2019, de la Contraloría General de la República).

DÉCIMA: De las modificaciones y términos bilaterales.

Las partes comparecientes podrán modificar, de común acuerdo el proyecto, en lo que diga relación con los elementos de carácter accidental que forman parte de los mismos. Se debe dejar establecido que los elementos de carácter esencial de los convenios, tales como el plazo de duración, la focalización territorial y las plazas convenidas, no podrán modificarse bilateralmente, sino que deberá convocarse a un nuevo proceso licitatorio.

Sin embargo, podrán modificarse las plazas, siempre que se configure una situación de fuerza mayor, lo que deberá ser debidamente fundado por la respectiva Dirección Regional. Asimismo, dándose el supuesto recién señalado, la focalización territorial podrá ser modificada, en la medida que no se afecte la atención de los niños, niñas y adolescentes y no se incrementen los montos por beneficiario que el programa respectivo se encontraba percibiendo, especialmente en lo que refiere al factor lugar, todo ello sujeto a la competencia territorial del colaborador acreditado ejecutante.

A su vez, las partes comparecientes podrán poner término a este convenio, de común acuerdo, de manera fundada, con un plazo mínimo de anticipación de 30 días hábiles a su respectivo término, sin perjuicio que pueda acordarse entre las partes, un plazo inferior, siempre y cuando no se funde en situaciones de vulneraciones de los derechos de los niños niñas y adolescentes.

Las referidas modificaciones y términos de convenio deberán aprobarse por acto administrativo totalmente tramitado, (aplica dictamen N° 8.501, de 2019, de la Contraloría General de la República).

DÉCIMA PRIMERA: De la duración, vigencia y prórroga del convenio.

El convenio suscrito entre el Servicio y el colaborador acreditado comenzará a regir el primer día del mes siguiente al de la total tramitación de la resolución que lo apruebe, y la duración máxima de éste será de 1 año.

Para efectos de la total tramitación de la resolución que apruebe el convenio respectivo, el colaborador acepta que la notificación de la misma se realice al correo electrónico que haya indicado en el anexo 2 a. "Formulario de presentación de proyectos línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación modelo Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Grave (PRM)", en el recuadro que se consigna en el párrafo III "Antecedentes del Colaborador Acreditado" del formulario, conforme a lo señalado en el artículo 6: "Notificaciones, plazos y calendario de la licitación".

La vigencia del convenio debe extenderse hasta la aprobación de la rendición de cuentas o bien, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados, (aplica dictamen N° 92.578, de 2016, de la Contraloría General de la República).

La obligación de restituir los saldos, no ejecutados, no rendidos u observados, debe cumplirse dentro de un término prudencial, correspondiéndole a la autoridad ejercer todas las acciones que resulten necesarias al efecto, (aplica el dictamen N° 43.604, de 2015, de la Contraloría General de la República).

El Servicio podrá de manera excepcional prorrogar sólo por una vez los convenios sin necesidad de un nuevo llamado a concurso, si las evaluaciones de avance y resultados se consideran positivas, lo que se aprobará mediante el acto administrativo correspondiente debidamente fundado. Lo anterior, siempre y cuando al colaborador no le hayan sido aplicadas algunas de las sanciones establecidas en el artículo 41 de la ley N° 21.302, en los últimos doce meses, y no existan antecedentes fundados contra dicho colaborador acreditado o alguno de sus fundadores, directivos o trabajadores por algún ilícito de índole civil, penal o administrativo que constituyan vulneración de derechos contra los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado, lo que será evaluado por este Servicio.

DÉCIMA SEGUNDA: De la evaluación del proyecto:

Para este proyecto, la evaluación se efectuará en el mes 9° de su ejecución, de acuerdo a lo estipulado en las bases:

Duración del convenio	Mes de evaluación del convenio
1 año	Al mes 9° de su ejecución
1 año y 6 meses (18 meses)	Al mes 9° y 15° de su ejecución
1 año y tres meses (15 meses)	Al mes 12° de su ejecución
1 años y 9 meses (21 meses)	Al mes 12° y 18° de su ejecución
2 años (24 meses)	Al mes 12° y 21° de su ejecución

Al momento de verificarse la evaluación del proyecto, el colaborador deberá presentar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1), emanado de la Dirección del Trabajo, que dé cuenta de la situación previsional de todos los trabajadores de la Institución, al último día del mes anterior a aquél en que se cumplen el período objeto de evaluación. El presente requisito sólo será exigible para las entidades privadas.

La evaluación de los convenios se dirigirá a verificar:

- 1) El respeto, la promoción y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias.
- 2) El cumplimiento de los objetivos del convenio.
- 3) El logro de los resultados esperados especificados en el respectivo convenio.

4) La calidad de la atención que reciben los menores de edad y sus familias, el estado de salud y de educación de los niños, niñas y adolescentes que en ella residan, y las condiciones físicas del centro de residencia, en su caso.

5) Los criterios empleados por el colaborador acreditado para decidir el ingreso y el egreso de niños, niñas o adolescentes.

6) La administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos que conforman la subvención, de conformidad con los fines para los cuales aquella se haya otorgado, según la línea de acción subvencionable que corresponda.

Deberán considerarse como criterios objetivos, a lo menos, los siguientes:

a) Otorgar un trato digno y respetuoso a los niños, niñas y adolescentes. El Servicio deberá verificar el cumplimiento del respeto a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de conformidad a las orientaciones técnicas que se dicten para cada modalidad de atención.

b) Revinculación familiar o la búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar. El Servicio deberá verificar que cada modalidad de cuidado alternativo considere acciones destinadas a evitar el ingreso o prolongación de la estadía de los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial o de acogimiento familiar, de conformidad a las orientaciones técnicas y procedimientos que el Servicio dicte al efecto, entre las cuales deberá considerarse una evaluación de la familia centrándose en sus recursos y necesidades de apoyo para el ejercicio de su rol.

c) Asistencia oportuna en el acceso a las prestaciones de salud y educación de los niños, niñas y adolescentes. Se entenderá por asistencia oportuna para este efecto, el cumplimiento de las acciones definidas por el Servicio en las orientaciones técnicas orientadas al ejercicio del derecho a la salud y el derecho a la educación.

d) Idoneidad y pertinencia de la intervención ejecutada por los organismos colaboradores orientada a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se entenderá como idónea y pertinente la intervención cuando se haya dado cumplimiento a las acciones definidas por el Servicio en sus orientaciones técnicas, atendiendo a lo menos a la edad del niño, niña y adolescente y su grado de desarrollo, los procesos de intervención que se hubieren desarrollado en forma previa o paralelamente y el personal adecuado para su ejecución.

La evaluación deberá considerar y ponderar tanto las observaciones levantadas en los informes de visita realizadas por los jueces de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, así como aquellas emanadas de otros informes de organismos e instituciones que tengan por objeto la promoción, la protección o la defensa de los derechos de la niñez, y la opinión de los niños, niñas y adolescentes.

El procedimiento para la evaluación de desempeño anual de los convenios ejecutados por los colaboradores acreditados, se encuentra regulado a través de la Resolución Exenta N° 4748, de fecha 31 de diciembre de 2019, de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores, que aprobó el Procedimiento para la evaluación de desempeño anual de los convenios, o las resoluciones exentas que la modifiquen o reemplacen, las que formarán parte de este convenio, las que se encuentran publicadas en la página web del Servicio.

Como consecuencia de la evaluación, el Servicio podrá emitir instrucciones particulares a los colaboradores acreditados, indicando las deficiencias a corregir, con la finalidad de que el organismo adopte las medidas que correspondan dentro del plazo que determinará el Servicio, el que no podrá superar los noventa días, pudiendo prorrogarse por una sola vez y por el mismo plazo, en caso de existir razones fundadas. Excepcionalmente, y sólo en los casos en los que la naturaleza de las instrucciones que se ordena cumplir lo exija, podrá otorgarse fundadamente un plazo superior para su cumplimiento.

El retardo injustificado en el cumplimiento de las instrucciones será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley N° 20.032.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la adopción por parte de este Servicio de las demás acciones que contemple la normativa vigente.

DÉCIMA TERCERA: Del destino de los aportes financieros:

El colaborador acreditado como cooperador del Estado en la prestación del servicio de protección especializada gestionará los aportes financieros de todo tipo para el desarrollo de su línea de acción. Estos aportes estarán afectos al cumplimiento de los fines de protección especializada y sólo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo el cumplimiento de dichos fines.

Para estos efectos se entenderá que los aportes financieros recibidos se destinan a fines de protección especializada en el caso de las siguientes operaciones:

i) Pago de una remuneración a las personas naturales que ejerzan de forma efectiva funciones de administración superior que sean necesarias para la gestión del colaborador acreditado respecto del o los establecimientos de su dependencia, que se encuentren claramente precisadas en el contrato de trabajo respectivo. Dichas funciones no podrán ser delegadas, en todo o en parte, a personas jurídicas. Se entenderán comprendidas en este numeral las remuneraciones pagadas a las personas naturales que presten servicios en la administración superior del colaborador acreditado.

Estas remuneraciones deberán ser pagadas en virtud de un contrato de trabajo que establezca la dedicación temporal y especifique las actividades a desarrollar, y deberán ser razonablemente proporcionadas en consideración a la jornada de trabajo, el tamaño y complejidad del o los establecimientos donde se entreguen prestaciones de protección especializada, a las remuneraciones que normalmente se paguen en contratos de semejante naturaleza respecto de gestiones de

protección especializada de similar entidad, y a los ingresos del colaborador acreditado por concepto de aportes financieros del Estado, con el objeto de asegurar los recursos para una adecuada prestación del servicio de protección especializada.

Sin perjuicio de lo anterior, los colaboradores acreditados deberán informar al Servicio cuál o cuáles de sus directores ejercerán las funciones indicadas en este numeral.

Por su parte, el Servicio, en uso de sus atribuciones, podrá solicitar información respecto de la acreditación del cumplimiento de dichas funciones.

ii) Pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal que cumpla funciones de protección especializada y de operación para el cumplimiento de esas funciones en los establecimientos que pertenezcan al colaborador acreditado.

iii) Gastos de las dependencias de administración del o los establecimientos donde se entreguen prestaciones de protección especializada.

iv) Costos de aquellos servicios que estén asociados al funcionamiento y administración del o los establecimientos donde se entreguen prestaciones de protección especializada.

v) Adquisición de toda clase de servicios, materiales e insumos para el buen desarrollo de la línea de acción de protección especializada, así como recursos e insumos complementarios que sean útiles al proceso integral de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

vi) Inversión en activos no financieros necesarios para la prestación del servicio de protección especializada.

vii) Inversión en activos financieros de renta fija, siempre que los intereses o réditos sean utilizados para los fines de protección especializada dispuestos en este artículo y no se afecte de forma alguna la prestación de servicios de protección especializada.

viii) Gastos asociados a la mantención y reparación de los inmuebles y muebles a que se refieren los numerales anteriores.

ix) Pago de obligaciones garantizadas con hipotecas, contraídas con el solo propósito de adquirir el o los inmuebles en el cual funciona el establecimiento que entrega servicios de protección especializada de su dependencia.

x) Pago de créditos bancarios o mutuos cuyo objeto único y exclusivo sea el de invertir el dinero de dicho crédito o mutuo en mejoras necesarias o útiles, sean de infraestructura, equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del programa de protección especializada del establecimiento respectivo. En caso de que el colaborador acreditado sea propietario de dicha infraestructura, tales créditos o mutuos podrán encontrarse garantizados mediante hipotecas.

Si dichas mejoras superan las 1.000 unidades tributarias mensuales se deberá consultar por escrito al Consejo de Expertos del artículo 9 de la ley N°21.302.

xi) Gastos que guarden directa relación con la mejora de la calidad del servicio de protección especializada del o los establecimientos donde se realicen estas prestaciones.

xii) Gastos consistentes con la línea o programa de protección especializada o los establecimientos donde se realicen estas prestaciones.

Las operaciones que se realicen en virtud de los numerales iii), iv), v), vi), vii), viii), ix), x) y xi) del inciso segundo estarán sujetas a las siguientes restricciones:

a) No podrán realizarse con personas relacionadas con los colaboradores acreditados o representantes legales del establecimiento, salvo que se trate de personas jurídicas sin fines de lucro o de derecho público que presten permanentemente servicios al o los establecimientos de protección

especializada de dependencia del colaborador acreditado en materias técnico-pedagógicas, de capacitación y desarrollo de su proyecto educativo. El sostenedor deberá informar sobre dichas personas al Servicio.

b) Deberán realizarse de acuerdo a las condiciones de mercado para el tipo de operación de que se trate en el momento de celebrar el acto o contrato. Tratándose de operaciones a título oneroso, el precio de la transferencia no podrá ser superior a aquél que prevalece en el mercado.

Se prohíbe a los directores o representantes legales de un colaborador acreditado realizar cualquiera de las siguientes acciones:

1) Inducir a los administradores o a quienes ejerzan cargos análogos a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas u ocultar información.

2) Tomar en préstamo dinero o bienes de la entidad sostenedora o usar en provecho propio o a favor de personas relacionadas con ellos los bienes, servicios o créditos de la entidad colaboradora. 3) Usar en beneficio propio o de personas relacionadas a ellos las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo, en perjuicio de la entidad colaboradora.

4) En general, practicar actos contrarios a los estatutos o al fin de protección especializada del colaborador acreditado o usar su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para personas relacionadas con ellos, en perjuicio de la entidad colaboradora y su fin.

DÉCIMA CUARTA: De la rendición de cuentas y el procedimiento de reintegro

En materia de rendición de cuentas regirá lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, lo establecido en la Ley N° 20.032 y en las Resoluciones Exentas N°s 208, de 2022, Y n° 264, de 2024, de la Dirección Nacional del Servicio, o aquellas que las modifiquen o reemplacen, en todo lo que no se opongan a las disposiciones antes señaladas.

La rendición de cuentas se realizará de manera digital a través del Sistema Nacional de Información de este Servicio (SINAREC), en el módulo rendición de cuentas, de conformidad a la autorización otorgada por la Contraloría General de la República a través de la resolución N°3647, de 2020, o mediante el Sistema Electrónico que pueda adoptar este Servicio conforme a la normativa vigente.

La rendición de cuentas es sobre los gastos realizados en los proyectos en forma posterior a la total tramitación de la resolución que aprueba el convenio. En casos calificados por el Director Regional, fundamentados en razones de continuidad o buen servicio, podrá incluirse en la rendición de cuentas, gastos ejecutados con anterioridad a la total tramitación de la respectiva resolución.

El reintegro de los aportes financieros procederá en los casos en que el colaborador acreditado destine aquellos a fines distintos de los contemplados en el artículo 26 bis de la ley N°20.032, no cumpla con los objetivos del proyecto, no presente la documentación original de respaldo que acredite el gasto en la ejecución del proyecto o mantenga saldos no rendidos, observados y/o rechazados respecto de los recursos transferidos para el respectivo proyecto.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo instruido en la Resolución Exenta N°264, de 2024, de la Dirección Nacional del Servicio, o las instrucciones que la modifiquen o reemplacen y toda otra normativa que resulte aplicable, debiendo efectuarse el reintegro de los aportes en el plazo de 10

días hábiles, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 30 del decreto supremo N° 19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social - Subsecretaría de la Niñez, contados desde la última decisión del Servicio respecto de la rendición de cuentas, notificada de conformidad a ley N° 19.880, y según lo disponga la normativa vigente al momento de exigirse esta restitución.

Sin perjuicio de lo anterior, el colaborador acreditado que se encuentre en la obligación de restituir a este servicio los aportes financieros del Estado transferidos, conforme a la normativa vigente, deberá reintegrarlos en el plazo máximo de 60 días hábiles contados desde el término de la ejecución del convenio.

DÉCIMA QUINTA: De la supervisión y de la Auditoría de Gestión.

El Servicio supervisará y fiscalizará técnica, administrativa y financieramente el cumplimiento de lo establecido en la normativa legal, reglamentaria y normas técnicas determinadas conforme a ellas, respecto de la ejecución de los programas de protección especializada. La supervisión y fiscalización se hará, al menos, semestralmente respecto de todos los programas a lo largo del país, y tendrá como foco principal el bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que sean sujetos de atención del Servicio, el respeto de sus derechos, la calidad y mejora continua de los programas de protección especializada, y la administración proba de los recursos públicos. Deberá contar con la opinión de los niños, niñas y adolescentes atendidos y sus familias y cuidadores. Los resultados de estas fiscalizaciones serán públicos, se comunicarán en lenguaje sencillo y en un formato accesible para cualquier persona.

El Servicio fiscalizará, especialmente:

- i. Que los niños, niñas y adolescentes que se encuentren sujetos a cuidados alternativos, estén recibiendo cuidados adecuados y permanezcan desarrollándose en su entorno familiar, escolar y comunitario, salvo en aquellos casos en los que los tribunales competentes hagan una suspensión expresa y temporal respecto de su derecho de relación directa y regular con personas determinadas.
- ii. El cumplimiento de los principios, deberes y requisitos establecidos en esta ley, y de los estándares técnicos y de calidad establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el reglamento a que se refiere el artículo 3 ter de la ley N° 20.530, como condición para la no suspensión de las transferencias y/o de los convenios celebrados con terceros.
- iii. Los reclamos realizados por los niños, niñas y adolescentes atendidos, sus familiares o cuidadores, su naturaleza y gravedad, y la calidad, celeridad y eficiencia de la solución que fue entregada.
- iv. La cabal y oportuna reparación del daño y los perjuicios ocasionados a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de sus derechos fundamentales estando a su cuidado, o con ocasión de las prestaciones realizadas, como condición ineludible para mantener su acreditación como colaborador acreditado.
- v. Que las medidas e intervenciones decretadas por los tribunales de familia se realicen exclusivamente en el plazo en que fueron dictadas para su realización.

En el ejercicio de esta función, el Servicio deberá realizar visitas inspectivas, sin previo aviso, con la periodicidad necesaria para abarcar a todos los colaboradores acreditados.

En los casos en que el Servicio ejecute la línea de acción de cuidados alternativos, por medio de terceros, el Servicio implementará semestralmente una auditoría de gestión e impacto con el fin de fiscalizar los programas ejecutados por colaboradores acreditados.

DÉCIMA SEXTA: De la denuncia de hechos por vulneración de derechos.

Déjase establecido que cualquier obstaculización al ejercicio de su derecho al relacionamiento o comunicación familiar, educativa o comunitaria, así como cualquier amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas o adolescentes acogidos en cuidado alternativo de cualquier tipo, incluso cuando no sea constitutiva de falta o delito, podrá ser denunciada directamente por los afectados o por cualquier persona a su nombre ante las autoridades competentes. Constatados los hechos, el Director Nacional suspenderá el pago del aporte financiero del Estado correspondiente al niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos, en tanto la o las personas responsables de la afectación de ese derecho no sean removidas de sus cargos o no sean finiquitados sus servicios, según corresponda.

DÉCIMA SÉPTIMA: De las sanciones.

La realización, por parte de los colaboradores acreditados, de alguna de las conductas que se indican en el artículo 41 de la Ley N°21.302, serán sancionadas con amonestación escrita, multa, término anticipado, inhabilitación temporal y término de acreditación, según corresponda, para cuya aplicación, el Servicio se deberá sujetar al procedimiento previsto en el párrafo 7°, Título III.- De la Protección Especializada, de la ley referida.

DÉCIMO OCTAVA: De la garantía

El colaborador acreditado para efectos de garantizar el anticipo solicitado en su propuesta técnica contenida en el Anexo N°2, al momento de suscribir el convenio, presentó **Póliza de Seguro de Garantía, N°3012025211944, emitida con fecha 20 de mayo de 2025**, contratada a su nombre y en favor del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia RUT N°62.000.890-7, emitidas por **AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A., Rut N°76.363.534-1** por un monto de **634,00 UF** que corresponde o cubre el 100% de la cantidad solicitada por concepto de anticipo, y cuya vigencia se mantiene hasta el 30 de junio de 2026.

Si el plazo de vigencia de dicha garantía no considerara el total del período que se debe asegurar, según lo establecido en las bases de la licitación, deberá renovarse, correspondiendo al colaborador acreditado entregar a la Unidad Jurídica de la Dirección Regional respectiva, la nueva garantía, debiendo dicha instancia elaborar un acta, donde se consignen los siguientes elementos:

- Fecha de inicio: Deberá indicarse la fecha en que se emitió la primera garantía.
- Fecha de finalización: Deberá indicarse la fecha en que expira dicha garantía.
- Monto y periodo de la renovación: Deberá indicarse el monto de la nueva garantía y el periodo por el cual se extiende.

El presente anticipo corresponderá al equivalente de un mes del aporte financiero del Estado y se otorgará sólo al inicio del proyecto de acuerdo a lo solicitado por el colaborador acreditado. Dicho anticipo será descontado a partir de la segunda transferencia que le corresponda percibir al colaborador acreditado, en un máximo de 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 del D.S N°19, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y familia – Subsecretaría de la Niñez y del Ministerio de Hacienda.

El documento que garantice el anticipo sólo será devuelto al colaborador acreditado una vez que se haya pagado la totalidad del anticipo considerando la totalidad de los descuentos que correspondan.

DÉCIMA NOVENA: Marco regulador.

Las partes dejan expresa constancia que en lo no previsto por el presente convenio y el proyecto del colaborador que forma parte integrante del mismo, regirá especialmente lo dispuesto en la resolución exenta N°1470, de 27 de diciembre de 2024, de esta Dirección Nacional, modificada por las resoluciones exentas N° 147 y N° 168, ambas de 2025, todas del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que autorizó el décimo segundo concurso público de proyectos para la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, respecto de los programas que se indican, en la ley N°20.032, en el decreto supremo N°19, de 2021 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia- Subsecretaría de la Niñez-, y en toda otra normativa que le sea aplicable.

Respecto del uso de los recursos transferidos a los colaboradores acreditados de naturaleza privada, resultarán aplicables las normas contempladas en los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; en todo lo pertinente en cada caso; así como las normas de transparencia y probidad establecidas en la Constitución Política de la República de Chile. Cabe destacar que el Estado de Chile ha adscrito a estándares y directrices internacionales que habrán de tenerse presentes para esos efectos, tales como los relativos a ciberseguridad, los establecidos en la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos- OEA- sobre acceso a la información y especialmente en las Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidados de Niños, Resolución 64/142 de la Organización de las Naciones Unidas- ONU.

VIGÉSIMA: Limitación a la subcontratación

Queda prohibida toda subcontratación.

Lo anterior, es sin perjuicio de los trabajadores que contrate el colaborador acreditado para la prestación de los servicios objeto del presente convenio, los cuales, no tendrán relación laboral alguna con este Servicio, siendo responsabilidad de dicho colaborador en su calidad de empleador, el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales.

VIGÉSIMA PRIMERA: Prórroga de la competencia.

Para todos los efectos legales que pudieran derivarse de este convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Punta Arenas, prorrogando competencia y sometiéndose a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Ejemplares.

El presente convenio se extiende en tres ejemplares del mismo tenor, valor y fecha, quedando dos en poder del Servicio y el otro en poder de la Institución.

VIGÉSIMA TERCERA: Personerías.

La personería de doña **JESSICA RIVERA HERNÁNDEZ** para representar al Servicio, consta en Resolución Exenta RA N°215067/9713/2024 de fecha 22 de noviembre de 2024 y Resolución Exenta RA N°215067/823/2025, de fecha 03 de abril de 2025, ambas de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

La personería de don **ASTERIO HERNÁN ANDRADE GALLARDO** para representar a la **FUNDACIÓN ESPERANZA**, consta en escritura pública de Mandato Especial de fecha 21 de diciembre de 2023, otorgado ante notario público Pablo Valenzuela Pérez, en la ciudad de Punta Arenas.

**ASTERIO HERNÁN ANDRADE
GALLARDO
REPRESENTANTE
FUNDACIÓN ESPERANZA**

**JESSICA RIVERA HERNANDEZ
DIRECTORA REGIONAL (S)
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION
ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA
CHILENA**